

Mirada Legislativa

Núm. 94, enero de 2016

Antecedentes Históricos y Normatividad actual del Cannabis en México

Síntesis ejecutiva

- » El 15 de marzo de 1920, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las *Disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneren la raza*, el cual es el primer antecedente en la legislación mexicana en materia de control de narcóticos.
- » En 1923, el presidente Álvaro Obregón emitió el primer decreto presidencial que prohibía y limitaba la producción, la comercialización y el consumo de drogas y narcóticos.
- » El presidente Plutarco Elías Calles, en 1925, derogó el decreto obregonista, y fue sustituido por otro en el que se estipuló que el Departamento de Salubridad Pública se encargaría de autorizar la importación de opio, morfina, cocaína y adormidera en todas sus formas, así como también la prohibición de importación de opio preparado para fumar, de marihuana en cualquiera de sus formas y de heroína, sus sales y derivados.
- » En 1927, se discutió y aprobó el *Código Sanitario*, en el que se utilizó el término de “drogas enervantes” para incluir al opio en sus diversas formas, las sales, la morfina, la cocaína y heroína, la adormidera, las hojas de coca y los preparados que contengan algunas de esas sustancias.



- » El 27 de octubre de 1931, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el *Reglamento Federal de Toxicomanía*, en el periodo del presidente Pascual Ortiz Rubio.
- » El 14 de agosto de 1931, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el *Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común, y para toda la Republica en Materia de Fuero Federal*, el cual fue el primer ordenamiento de carácter penal que estableció la tipificación de conductas relacionadas con las drogas y los delitos contra la salud, circunstancia jurídica que no estaba en los códigos anteriores expedidos el 7 de diciembre de 1871 y del 15 de diciembre de 1929.
- » Durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo *Reglamento Federal de Toxicomanías* para combatir el tráfico de drogas y considera que los *viciosos* deben de ser tratados más como enfermos, que se deben de atender y curar.
- » México ha suscrito la *Convención de la Haya* y la *Convención Única de 1961*, también celebró los *Tratados de 1914, Ginebra de 1925*, el *Tratado de Versalles*, documentos con el objetivo de reprimir el tráfico de drogas
- » En el año de 1968, se expidió el primer Código Penal que a nivel federal tipificó de manera clara y precisa las conductas de sembrar, cultivar, cosechar o poseer plantas de “cannabis”, pero no criminalizó el consumo.
- » El artículo 234 de la Ley General de Salud, regula lo relativo a los estupefacientes, enlistan diversos productos entre los que se encuentran la marihuana, cocaína, heroína, entre otros.
- » En el año 2009, se adicionó a la Ley General de Salud el Capítulo VII, titulado “Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo” y en el numeral 479, se estipuló en una tabla orientativa de las dosis máximas de consumo personal e inmediato de opio, heroína, marihuana, cocaína, LSD, MDA y metanfetamina.
- » Los estados que contemplan en su legislación disposiciones relativas al narcomenudeo son Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito

Federal, Durango, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala.

- » El Código Penal Federal establece penas de 10 a 25 años de prisión y multa de 100 hasta 500 días de multa por la producción, transportación, tráfico, comercialización, suministro, introducción o extracción de narcóticos.
- » La posesión de narcóticos para la producción, transportación, tráfico, comercialización, suministro, introducción o extracción de narcóticos, se castiga de 5 a 15 años de prisión y de 100 a 350 días de multa.
- » Con 4 a 7 años con 6 meses de prisión y de 50 a 150 días de multa se sanciona al poseedor de narcóticos sin la autorización prevista en la Ley General de Salud y cuando no sea para la producción, transportación, tráfico, comercialización, suministro, introducción o extracción de narcóticos.
- » En la resolución de la SCJN se sustenta en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, para conceder el amparo a los solicitantes.
- » Otros derechos humanos fundamentales defendidos por los órganos que integran la ONU y que la SCJN debió observar en su resolución en relación con previsto en la legislación mexicana como son los derechos a la vida y a la salud.

“...aunque los hombres al entrar en sociedad abandonen en manos de ella la igualdad, libertad y poder ejecutivo que tuvieron en estado de naturaleza, para que de los tales disponga el poder legislativo, según el bien de la sociedad exigiere, con todo, por acaecer todo ello con la única intención en cada uno de las mejoras de su preservación particular y de su libertad y bienes (porque de ninguna criatura racional cabrá suponer que cambie de condición con el intento de empeorarla), como espaciándose más allá del bien común. John Locke. Dos tratados sobre el gobierno civil -Ensayo sobre el gobierno civil.

Introducción

La historia muestra que para el control del consumo de drogas se han instrumentado tratados internacionales, se han modificado legislaciones penales y de salud. En un primer momento el objetivo principal fue evitar la comercialización del opio por China y obstaculizar las consecuencias económicas favorables para el país asiático, en la época moderna, para prohibir el tráfico, consumo y comercialización de cualquier estupefaciente o droga, entre las que se encuentra el cannabis.

Tanto en los tratados como en las legislaciones, en distintos momentos, se considera el daño a la salud de las drogas, estupefacientes y psicotrópicos, tal y como se muestra en la breve reseña histórica que se presenta en el primer apartado de este trabajo, sin embargo, se ha privilegiado la criminalización y la prohibición en materia de posesión, consumo y comercialización de cannabis.

En el segundo punto se describen las leyes federales relacionadas con el tema y en el tercer apartado, se revisa desde la perspectiva de los derechos humanos, la ejecutoria dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa al uso recreativo y lúdico de la marihuana, describiendo los principios regulatorios y la ponderación de esos derechos. Por último, se presentan las consideraciones finales.

I. Antecedentes Históricos

En la etapa postrevolucionaria se realizaron debates en el Congreso Constituyente de 1917 para imponer un control estatal sobre el consumo de drogas, al respecto el diputado José M. Rodríguez propuso un Consejo de Salubridad General, órgano que emitiría normas para “corregir esta enfermedad de la raza proveniente principalmente del alcoholismo y del envenenamiento por sustancias medicinales como el opio, la morfina, el éter, la cocaína y la mariguana”.¹

El 15 de marzo de 1920, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), publico las *Disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneren la raza* ², en su contenido se estableció que el Departamento de Salubridad debía de expedir un permiso para la importación de opio, morfina, heroína y cocaína, además su comercialización se podría hacer en expendios de medicinas a través de un registro riguroso. En esas *Disposiciones* se prohibió el cultivo y comercio de la mariguana y de la adormidera. A la anterior regulación, el gobierno provisional de Adolfo de la Huerta, adicionó la obligación de que para la venta, las boticas requerían contar con un farmacéutico titulado, sin embargo los boticarios ganaron los amparos y la disposición no se aplicó.

En el año de 1923, el presidente Álvaro Obregón emitió el primer decreto presidencial que prohibía y limitaba la producción, la comercialización y el consumo de drogas y narcóticos,³ y en el año de 1925, durante la gestión del presidente Plutarco Elías Calles se derogó ese decreto, el cual fue sustituido por otro en el que se estipuló que el Departamento de Salubridad Pública se encargaría de autorizar la importación de opio, morfina, cocaína y adormidera en todas sus formas, así como también la prohibición de importación de opio preparado para

¹ Ricardo Pérez Montfort. (2000). *Historia Primigenias*. 20 de noviembre del 2015, de Nexos Sitio web: <http://www.nexos.com.mx/?p=9568>

² Departamento de Salubridad. (1920). *Disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneren la raza*. 20 de noviembre del 2015, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: <http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1920&-month=03&day=15>

³ Ricardo Pérez Montfort (Coordinador) Pablo Picatto y Alberto del Castillo. (1997). *Hábitos, normas y escándalo. Prensa, criminalidad y droga durante el porfiriato tardío*. 20 de noviembre del 2015, de Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la Editorial Plaza y Valdés, S. A. de C. V. Sitio web: <https://goo.gl/71owiR>

fumar, de marihuana en cualquiera de sus formas y de heroína, sus sales y derivados. Las sustancias autorizadas a través de los permisos correspondientes podrían ingresar a través de las aduanas de Nogales, Laredo, Veracruz, Progreso, La Paz y Mazatlán.

Ese decreto establecía un límite en porcentajes de dichas sustancias en su modalidad de preparados que sólo requerían registro aduanal y además el Departamento de Salubridad Pública junto con la Secretaría de Hacienda tenían facultades para reglamentar en materia de drogas los acuerdos sobre el remate de narcóticos ingresados al país ilegalmente y se creó una policía sanitaria para impedir el comercio ilícito de drogas.

De forma paralela a los avances de México en la regulación de las drogas, el 23 de enero de 1912 en La Haya se reunieron los representantes de Alemania, de los Estados Unidos de América; de China; de la República Francesa; del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y de los Territorios Británicos de allende los mares, de las Indias; de Italia; del Japón; de los Países-Bajos; de Persia; de la República Portuguesa; el de todas las Rusias y de Siam para suscribir la *Convención Internacional del Opio*⁴, con la finalidad de prohibir la importación y exportación del opio preparado y para controlar a todos los que fabriquen, importen, vendan, distribuyan y exporten la morfina, cocaína y de sus sales respectivas para que sus usos sean medicinales y legítimos y evitar el contrabando proveniente de China y de sus Colonias de Extremo Oriente. Este documento fue suscrito por México el 15 de mayo de 1912, aprobado por el Senado de la República el 8 de octubre de 1924 y entró en vigor el 8 de mayo de 1925.⁵ La publicación del documento en el DOF ocurrió hasta el 18 de marzo de 1927.

⁴ AA.VV. (1912). *Convención Internacional del Opio*. 20 de noviembre del 2015, de Orden Jurídico Nacional Sitio web: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2012/CDTratados/pdf/M26.pdf>

⁵ Fue modificada por el *Protocolo que Enmienda los Acuerdos, Convenciones y Protocolos sobre Estupefacientes*, concertados en La Haya el 23 de enero de 1912, en Ginebra el 11 de febrero de 1925 y el 19 de febrero de 1925, y el 13 de julio de 1931, en Bangkok el 27 de noviembre de 1931 y en Ginebra el 26 de junio de 1936, adoptado en Lake Success, Nueva York, el 11 de diciembre de 1946, que está vigente y visible en <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2012/CDTratados/pdf/M26.html>

Otro documento internacional suscrito por México fue la *Convención para Limitar la Fabricación y Reglamentar la Distribución de Drogas Estupefacientes y el Protocolo de Firma* del 13 de julio de 1931, el cual se publicó en el DOF el 23 de enero de 1933. En ese documento se destaca lo siguiente: “El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se reserva el derecho de imponer, dentro de su territorio, como ya lo ha hecho, medidas más estrictas que las establecidas por la misma Convención para la restricción del cultivo o elaboración, uso, posesión, importación, exportación y consumo de las drogas a que se refiere la presente Convención”.⁶

Entre los años de 1927 y 1931, se expidieron el *Código Penal* y el *Reglamento Federal de Toxicomanía*, en ambos ordenamientos se plasmó como objetivo el control estatal sobre las drogas, pero entre la Secretaría de Gobernación y el Departamento de Salubridad existieron diferencias, pues mientras que el primero pretendía un afán coercitivo, el segundo buscó entender el fenómeno sin dejar de prohibirlas y catalogar la adicción como enfermedad.⁷

La regulación de la drogas se consolidó en el año de 1927, al discutirse y aprobarse el *Código Sanitario*, en el que se utilizó el término de “drogas enervantes” para incluir al opio en sus diversas formas, las sales, la morfina, la cocaína y heroína, la adormidera, las hojas de coca y los preparados que contengan algunas de esas sustancias.⁸

Otro ordenamiento que junto con el *Código Sanitario* sirvió para la regulación de drogas fue el *Reglamento Federal de Toxicomanía* expedido en el periodo del presidente Pascual Ortiz Rubio y publicado en el DOF el 27 de octubre de 1931.⁹

⁶ AA.VV. (1933). *Convención para Limitar la Fabricación y Reglamentar la Distribución de Drogas Estupefacientes y Protocolo de Firma*. 20 de noviembre del 2015, de Orden Jurídico Nacional Sitio web: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2012/CDTratados/pdf/M71.html>

⁷ Ricardo Pérez Montfort. (2000). *Historia Primigenias*. 20 de noviembre del 2015, de Nexos Sitio web: <http://www.nexos.com.mx/?p=9568>

⁸ Ricardo Pérez Montfort (Coordinador) Pablo Picatto y Alberto del Castillo. (1997). *Hábitos, normas y escándalo. Prensa, criminalidad y droga durante el porfiriato tardío*. 20 de noviembre del 2015, de Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la Editorial Plaza y Valdés, S. A. de C. V. Sitio web: <https://goo.gl/71owiR>

⁹ Departamento de Salubridad Pública. (1931). *Reglamento Federal de Toxicomanía*. 20 de noviembre del 2015, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: <http://goo.gl/WBNuVy>

En su contenido se destaca que:

- » El Departamento de Salubridad Pública se encargaría de fijar los procedimientos curativos para los “toxicómanos.”
- » La obligación de médicos, directores de hospitales y de escuelas, así como también de encargados de fábricas, talleres y de asilos de informar a las autoridades sanitarias de todos los casos, confirmados o sospechosos, de toxicomanía en un plazo de 24 horas siguientes al diagnóstico de la enfermedad o del conocimiento del caso.
- » Establecimiento de hospitales federales supervisados por las autoridades sanitarias federales para internación y tratamiento obligatorio de los toxicómanos.
- » Ordenó la aplicación de sanciones a los médicos que infringieran las obligaciones establecidas en el ordenamiento regulatorio.

En ese mismo año y como consecuencia de la adhesión de México a las convenciones internacionales citadas, el 14 de agosto se publicó en el DOF el *Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común, y para toda la Republica en Materia de Fuero Federal*,¹⁰ el cual fue el primer ordenamiento de carácter penal que estableció la tipificación de conductas relacionadas con las drogas y los delitos contra la salud, circunstancia jurídica que no estaba en los códigos anteriores de 7 de diciembre de 1871 y de 15 de diciembre de 1929.

En ese ordenamiento se adicionó el Título Séptimo denominado “Delitos contra la Salud” en el que se estableció lo siguiente:

- » La clasificación de drogas enervantes era estipulada en el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos.
- » Las sanciones eran de prisión de seis meses a siete años y multa de cincuenta a cinco mil pesos para la persona que se dedicara al comercio, elaboración,

¹⁰ Congreso de la Unión. (1931). *Código Penal Federal -Antes Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal-* Vigente. 20 de noviembre del 2015, de Suprema Corte de Justicia de la Nación Sitio web: <http://goo.gl/NqPKTE>

posesión, compra, enajenación, ministración gratuita y en general, a cualquier acto de adquisición, suministro o tráfico de drogas enervantes, tráfico de semillas o plantas que tengan carácter de drogas enervantes con opio “cocinado” o preparado para fumar o con sustancias preparadas para un vicio de los que “envenenan al individuo y degeneran la raza”.

- » A los importadores o exportadores ilegales de drogas enervantes, se les imponía una pena de seis a diez años de prisión y multa de cincuenta a diez mil pesos.
- » Las drogas enervantes o sustancias decomisadas se ponían a disposición de la autoridad sanitaria federal para su destrucción o aprovechamiento lícito.

El *Reglamento Federal de Toxicomanía* de 1931, fue derogado el 17 de febrero de 1940, por la publicación en el DOF, del nuevo *Reglamento Federal de Toxicomanías*¹¹ expedido por el Presidente Lázaro Cárdenas para combatir el tráfico de drogas y considera que los *viciosos* deben de ser tratados más como enfermos, que se deben de atender y curar, que como delincuentes; ya que con la aplicación del Reglamento de 1931 se instauró un sistema de persecución y denuncia de los toxicómanos y de los traficantes de drogas.

Por ello, en el ordenamiento Cardenista se facultaba al Departamento de Salubridad para que fijará los tratamientos y los requisitos para autorizar a médicos cirujanos particulares la prescripción de narcóticos y a los farmacéuticos para que los vendieran. También ordenaba la fundación de dispensarios y hospitales gratuitos que fuesen necesarios para la atención de los toxicómanos. Este reglamento fue suspendido el 3 de julio de 1940 ya que por la Segunda Guerra Mundial existía dificultad para adquirir drogas enervantes utilizadas para el tratamiento de los toxicómanos, en su lugar se siguió aplicando el de 1931.¹²

Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue el gran número de veteranos con problemas de drogadicción y México se convirtió en un país de tránsito para transportar droga de países sudamericanos a Estados Unidos, esto motivo que el 3 de agosto de 1948

¹¹ Departamento de Seguridad Pública. (1940). *Reglamento Federal de Toxicomanías*. 20 de noviembre del 2015, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: <http://goo.gl/YWwe5N>

¹² *Ídem*

se reformará el Código Penal para incluir como delito la elaboración y posesión, el comercio y transporte, la compra, la enajenación y el suministro gratuito de enervantes. Además de los acontecimientos sociales, México firmó la *Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas*, en la que los adherentes se comprometieron a expedir legislaciones para tipificar delitos en materia de drogas.

En el ámbito internacional, México además de haber suscrito la *Convención de la Haya* y la *Convención Única de 1961*, también celebró los *tratados de 1914, Ginebra 1925*, el *Tratado de Versalles*, documentos con el objetivo de reprimir el tráfico de drogas.

En épocas recientes México suscribió la *Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas*¹³, cuyo objetivo “...es promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión internacional.” Y también señala que “En el cumplimiento de las obligaciones que hayan contraído en virtud de la presente Convención, las Partes adoptarán las medidas necesarias, comprendidas las de orden legislativo y administrativo, de conformidad con las disposiciones fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.”

En síntesis, de acuerdo con la ONU, el control de drogas se sustenta en la *Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes*, en el *Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971* y en la *Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988*. Estos tratados son acuerdos en materia de fiscalización internacional de drogas, los tres se complementan, no obstante, las Convenciones de 1961 y 1971, tienen como objetivo principal establecer medidas de control a nivel global para garantizar la disponibilidad de estupefacientes y sustancias sicotrópicas con fines médicos y científicos.

¹³ AA.VV. (1988). *Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas*. 20 de noviembre del 2015, de Organización de las Naciones Unidas Sitio web: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf

Por la firma de tratados internacionales tanto, el *Código Penal Federal* fue objeto de reformas para cumplir con las obligaciones adquiridas en esos convenios, como el entonces denominado *Código Sanitario*. El segundo de ellos, desde su primera expedición en 1931 y en su denominación actual como *Ley General de Salud*, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, ha previsto un listado de estupefacientes y psicotrópicos; la prohibición de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, adquisición, posesión, comercio y transporte de esos productos y sustancias.

Respecto al, *Código Penal Federal* fue reformado en materia de delitos contra la salud desde 1931, tanto por la persecución de los delitos contra la salud como para incluir la prevención y la rehabilitación de los adictos y no para tratarlos como traficantes ni como criminales, con una vinculación a la clasificación de narcóticos, drogas o estupefacientes que realizó el entonces Departamento de Salubridad a través del Código Sanitario y que sigue realizando la Secretaría de Salud en la Ley General de Salud (Cuadro 1).

Cuadro 1. Evolución del Código Penal Federal en materia de cannabis

Fecha de Publicación en el DOF	Conductas Delitos contra la Salud	Penas
14 de agosto de 1931	<p>Comerciar, elaborar, poseer comprar, enajenar, ministrar gratuitamente y en general, verifique cualquier acto de adquisición, suministro o tráfico de drogas enervantes sin llenar los requisitos que para el caso fijen las leyes y demás disposiciones sanitarias.</p> <p>Sembrar, cultivar, comerciar, poseer, comprar, enajenar, ministrar gratuitamente y, en general, verificar cualquier acto de adquisición, suministro o tráfico de semillas o plantas que tengan carácter de drogas enervantes, y</p> <p>Realizar cualquiera de las conductas descritas con opio "cocinado" o preparado para fumar o con sustancias preparadas para un vicio de los que envenenan al individuo y degeneran la raza, que hayan sido motivo de declaración expresa por leyes o disposiciones sanitarias.</p>	Se impondrán prisión de seis meses a siete años y multa de cincuenta a cinco mil pesos.

Mirada Legislativa

Núm. 94

Fecha de Publicación en el DOF	Conductas Delitos contra la Salud	Penas
14 de noviembre de 1947	Tipifica las mismas conductas.	Se impondrá prisión de uno a diez años y multa de cien a diez mil pesos. No podrá otorgarse la condena condicional, aunque la pena impuesta en la sentencia definitiva no exceda de dos años de prisión, a los que cultiven, elaboren o en cualquier forma trafiquen con drogas enervantes, o con semillas o plantas que tengan ese carácter.
	El que provoque o ilícitamente instigue, induzca o auxilie a otra persona, para el uso de drogas enervantes o de semillas o plantas que tengan ese carácter.	Agravante Si ésta fuere menor de edad o incapacitada, o si el agente aprovecha su ascendiente o autoridad, la pena será, además de la multa, de tres a doce años de prisión.
8 de marzo de 1968	Sembrar, cultivar, cosechar o poseer plantas de “cannabis” resinosas reputadas como estupefacientes sin llenar los requisitos que para el caso fijen las leyes y disposiciones sobre la materia o con infracción de ellas. Cualquier acto que se realice con plantas de “cannabis” resinosas o con la resina separada, en bruto o purificada, de dichas plantas, diverso a los enumerados en este precepto, pero determinados como delitos en los artículos siguientes, quedará comprendido, para los efectos de su sanción.	Se impondrán prisión de dos a nueve años y multa de un mil a diez mil pesos. En ningún caso se concederá el beneficio de la Condena Condicional, a los que siembren, cultiven o cosechen plantas de “cannabis” resinosas, que tengan el carácter de estupefacientes.
	Tipifica las mismas conductas en el Código Penal de 1931 y se adicionó: Realizar actos de provocación general, o que instigue, induzca o auxilie a otra persona para que use de estupefacientes, o a que ejecute con ellos, cualesquiera de los actos delictuosos contra la salud.	Se impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a veinte mil pesos.
	Si la persona inducida o auxiliada fuere menor de 18 años o incapacitada, o si el agente aprovecha su ascendiente o autoridad para ello.	Multa de dos mil a veinte mil pesos y prisión a de cuatro a doce años de prisión.

Mirada Legislativa

Núm. 94

Fecha de Publicación en el DOF	Conductas Delitos contra la Salud	Penas
	No es delito la posesión, por parte de un toxicómano, de estupefacientes en cantidad tal que, racionalmente, sea necesaria para su propio consumo. En este caso quedará sujeto a las medidas de seguridad que señala el artículo 24, inciso 3o. de este Código.	Las penas y medidas de seguridad son: Prisión, reclusión de locos, sordomudos, degenerados o toxicómanos, confinamiento, prohibición de ir a lugar determinado, sanción pecuniaria, pérdida de los instrumentos del delito, confiscación o destrucción de cosas peligrosas o nocivas, amonestación, apercibimiento, caución de no ofender, suspensión o privación de derechos, inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos, publicación especial de sentencia, vigilancia de la policía, suspensión o disolución de sociedades y medidas tutelares para menores.
31 de diciembre de 1974	Sembrar, cultivar o cosechar plantas de cannabis o marihuana.	Prisión de dos a nueve años y multa de un mil a diez mil pesos.
	El que no sea adicto al cannabis o marihuana o a cualquiera de las sustancias. El que adquiera o posea alguna de éstas por una sola vez, en cantidad tal que esté destinada a su propio e inmediato consumo.	Se castigará con prisión de seis meses a tres años y multa hasta de cinco mil pesos.
	Si el mismo sujeto además suministra gratuitamente a un tercero cualquiera de las sustancias indicadas, para su propio e inmediato consumo.	Agravante Sanción con dos a seis años de prisión y multa de un mil a diez mil pesos.
8 de diciembre de 1978	Al que por su cuenta o con financiamiento de terceros siembre, cultive o coseche plantas de cannabis o marihuana, siempre que en él concurren escasa instrucción y extrema necesidad económica. Las mismas sanciones se impondrán a quien permita, en iguales circunstancias que en el caso anterior, que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, se cultiven dichas plantas.	Prisión de dos a ocho años y multa de mil a veinte mil pesos.
	Si a juicio del Ministerio Público o del Juez competentes, que deberán actuar para todos los efectos que se señalan en este Artículo con el auxilio de peritos, la persona que adquiera o posea para su consumo personal sustancias o vegetales descritos en la Ley General de Salud tiene el hábito o la necesidad de consumirlos.	Si la cantidad no excede de la necesaria para su propio e inmediato consumo, el adicto o habitual sólo será puesto a la disposición de las autoridades sanitarias para que bajo la responsabilidad de estas sea sometido al tratamiento y a las demás medidas que procedan.

Mirada Legislativa

Núm. 94

Fecha de Publicación en el DOF	Conductas Delitos contra la Salud	Penas
8 de diciembre de 1978	Si la cantidad excede de la fijada a la requerida para satisfacer las necesidades del adicto o habitual durante un término máximo de tres días.	Prisión de dos meses a dos años y multa de quinientos a quince mil pesos.
	<p>Todo procesado o sentenciado que sea adicto o habitual quedará sujeto a tratamiento.</p> <p>Para la concesión de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo al hábito o adicción, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento adecuado para su curación, bajo la vigilancia de la autoridad ejecutora.</p>	
	Al que no siendo adicto a cualquiera de las sustancias comprendidas en la Ley General de Salud, adquiera o posea alguna de éstas por una sola vez, para su uso personal y en cantidad que no exceda de la destinada para su propio e inmediato consumo.	Se impondrán prisión de seis meses a tres años y multa hasta de quince mil pesos.
	Si alguno de los sujetos suministra, además, gratuitamente, a un tercero, cualquiera de las sustancias indicadas, para uso personal de este último y en cantidad que no exceda de la necesaria para su consumo personal e inmediato.	Prisión de dos a seis años y multa de dos mil a veinte mil pesos.
	La simple posesión de cannabis o marihuana, cuando tanto por la cantidad como por las demás circunstancias de ejecución del hecho, no pueda considerarse que está destinada a realizar algún delito.	Prisión de dos a ocho años y multa de cinco mil a veinticinco mil pesos.
	Al que no siendo miembro de una asociación delictuosa, transporte cannabis o marihuana, por una sola ocasión siempre que la cantidad no exceda de cien gramos.	Prisión de dos a ocho años y multa de mil a veinte mil pesos.

Mirada Legislativa

Núm. 94

Fecha de Publicación en el DOF	Conductas Delitos contra la Salud	Penas
	<p>Al que siembre, cultive, coseche, manufacture, fabrique, elabore, prepare, acondicione, posea, transporte, venda, compre, adquiera, enajene o trafique en cualquier forma, comercie, suministre aun gratuitamente, o prescriba vegetales o sustancias descritas en la Ley General de Salud.</p> <p>Al que ilegalmente introduzca o saque del país vegetales o sustancias de los comprendidos en cualquiera de las fracciones del artículo 193, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito, o realice actos tendientes a consumir tales hechos.</p> <p>Al que aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, para la ejecución de alguno de los delitos contra la salud.</p> <p>Al que realice actos de publicidad, propaganda, provocación general, proselitismo, instigación o auxilio ilegal a otra persona para que consuma cualquiera de los vegetales o sustancias descritas en la Ley General de Salud.</p>	<p>Prisión de siete a quince años y multa de diez mil a un millón de pesos.</p>
3 de enero de 1989	<p>Al que dedicándose a las labores propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de cannabis o marihuana, por cuenta o con financiamiento de terceros, cuando en él concurren evidente atraso cultural, aislamiento social y extrema necesidad económica.</p> <p>Igual pena se impondrá a quien permita que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, se cultiven dichas plantas, en circunstancias similares al caso anterior.</p>	<p>Prisión de dos a ocho años.</p>

Mirada Legislativa

Núm. 94

Fecha de Publicación en el DOF	Conductas Delitos contra la Salud	Penas
10 de enero de 1994	<p>Producir, transportar, traficar, comerciar, suministrar aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud.</p> <p>Por producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, y por comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico.</p> <p>Introducir o extraer del país alguno de los narcóticos aunque fuere en forma momentánea o en tránsito.</p> <p>Aportar recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos; y</p> <p>Realizar actos de publicidad o propaganda, para que se consuma cualesquiera de las sustancias comprendidas en el artículo anterior</p>	<p>Prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa.</p>
	<p>Al poseedor de alguno de los narcóticos señalados en la Ley General de Salud o sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud.</p>	<p>Sanción de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa.</p> <p>No se procederá en contra de quien, no siendo farmacodependiente se le encuentre en posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, por una sola vez y en cantidad tal que pueda presumirse que está destinada a su consumo personal.</p>
	<p>Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurren escasa instrucción y extrema necesidad económica.</p> <p>Igual pena se impondrá al que en un predio de su propiedad, tenencia o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la hipótesis anterior.</p>	<p>Prisión de uno a seis años.</p>

Mirada Legislativa

Núm. 94

Fecha de Publicación en el DOF	Conductas Delitos contra la Salud	Penas
	<p>Al farmacodependiente que posea para su estricto consumo personal algún narcótico de los señalados en el artículo.</p> <p>El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se enteren en algún procedimiento de que una persona relacionada con él es farmacodependiente, deberán informar de inmediato a las autoridades sanitarias, para los efectos del tratamiento que corresponda.</p> <p>Todo procesado o sentenciado que sea farmacodependiente quedará sujeto a tratamiento.</p>	<p>No se aplicará pena alguna.</p> <p>Para la concesión de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento adecuado para su curación bajo vigilancia de la autoridad ejecutora.</p>
20 de agosto de 2009	<p>El comercio y suministro de narcóticos podrán ser investigados, perseguidos y, en su caso sancionados por las autoridades del fuero común en los términos de la Ley General de Salud, cuando se colmen los supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento. (Narcomenudeo)</p> <p>Las conductas son:</p> <p>Introducir o extraer del país alguno de los narcóticos comprendidos en la Ley General de Salud, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito.</p> <p>Si la introducción o extracción no llegare a consumarse, pero de los actos realizados se desprenda claramente que esa era la finalidad del agente.</p> <p>Aportar recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos contra la salud.</p> <p>Realizar actos de publicidad o propaganda, para que se consuma cualesquiera de las sustancias.</p>	<p>Pena aplicable será de hasta las dos terceras partes.</p> <p>Agravantes</p> <p>Las mismas penas previstas en este artículo y, además, privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, se impondrán al servidor público que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere cualesquiera de las conductas señaladas en este artículo.</p>

Elaboración propia a partir de la información contenida en Normativa Nacional e Internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en <http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=643&TPub=1>

Del Cuadro No. 1 se desprende que en el año de 1968, se expidió el primer Código Penal que a nivel federal tipificó de manera clara y precisa las conductas de sembrar, cultivar, cosechar o poseer plantas de “cannabis”, pero no criminalizó el consumo, lo cual ocurrió en 1978. También se destaca que fue en el 2009, la fecha en que se adicionó el narcomenudeo como delito del fuero común.

I. Regulaciones Federales

Este apartado contiene los diversos artículos que regulan la prohibición de la producción, siembra, tráfico, comercialización y consumo de drogas que se ha concretado durante varios años en las legislaciones federal y estatal, tanto en las disposiciones relacionadas con la salud como con las conductas delictivas.

En el ámbito federal, los ordenamientos involucrados son la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.

a. Ley General de Salud

En el Capítulo V de la Ley General de Salud (LGS), se regula lo relativo a los estupefacientes, en el artículo 234 la Secretaría de Salud enlistan diversos productos entre los que se encuentran la marihuana, cocaína, heroína, entre otros y el diverso 235 dispone que “La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga” estará sujeto a la LGS, a los tratados internacionales firmados por México, a las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General, en la parte final de este numeral señala con claridad que: “Los actos a que se refiere este Artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud.”

No obstante, que en el último párrafo del artículo antes citado se prevé la posibilidad de realizar los actos previstos en el numeral 234 para fines médicos y científicos.¹⁴

¹⁴ El periódico “El Universal” publicó el 30 de noviembre del 2015 la nota titulada *Investigadores buscan amparo por marihuana*, escrita por Cristina Pérez-Stadelmann <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/11/30/investigadores-buscan-amparo-por-marihuana>

El artículo 237 de la LGS prohíbe en el territorio nacional “la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo” del “opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.”

Uno de los cambios legislativos a la LGS fue para definir la actividad del narcomenudeo, lo cual ocurrió en el año 2009 al publicarse en el DOF una reforma en la que se adicionó el Capítulo VII, titulado “Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo” y en el numeral 479, se estipuló en una tabla orientativa de las dosis máximas de consumo personal e inmediato de opio, heroína, marihuana, cocaína, LSD, MDA y metanfetamina:¹⁵

Cuadro No. 2 Dosis previstas en el artículo 479 de la LGS

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato		
Narcótico	Dosis máxima de consumo personal e inmediato	
Opio	2 gr.	
Diacetilmorfina o Heroína	50 mg.	
Cannabis Sativa, Indica o Marihuana	5 gr.	
Cocaína	500 mg.	
Lisergida (LSD)	0.015 mg.	
	Polvo, granulado o cristal	Tabletas o cápsulas
MDA, Metilendioxfanfetamina	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.
MDMA, dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.
Metanfetamina	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

Fuente: Tabla prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud consultada en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_121115.pdf

¹⁵ Congreso de la Unión. (2009). *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales*. 20 de noviembre del 2015, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5106093

Cabe señalar, que de acuerdo con el artículo 195 del *Código Penal Federal*, la posesión de narcóticos podrá ser sancionada en el fuero común cuando se tipifiquen las conductas del narcomenudeo, por lo cual en el Artículo Primero transitorio de ese Decreto, se dispuso que las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrían un plazo de un año para adecuar sus legislaciones. A la fecha los estados que contemplan en su legislación esas disposiciones son Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala.

b. Código Penal Federal

Este ordenamiento dispone que serán narcóticos, estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales los que clasifica la LGS, los convenios y tratados internacionales. Asimismo tipifica todas las conductas que se relacionen con la producción, transporte, tráfico, comercialización, suministro (gratuito o prescrito sin la autorización prevista en la LGS) de esos productos y plasma las siguientes definiciones¹⁶:

- » **Producción:** manufactura, fabricación, elaboración, preparación o acondicionamiento de algún narcótico.
- » **Comercialización:** venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico.
- » **Suministro:** transmisión material de forma directa o indirecta de la tenencia de narcóticos. En esta definición también se incluye lo relativo al narcomenudeo, previsto en el artículo 474 de la LGS y aplicable en el fuero común.

Las penas previstas en el (CPF) previstas en los artículos 194, 195, 195 bis, 196, 197 y 198 son las siguientes:

¹⁶ Congreso de la Unión. (1931). *Código Penal Federal -Antes Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal-* Vigente. 20 de noviembre del 2015, de Suprema Corte de Justicia de la Nación Sitio web: <http://goo.gl/NqPKTE>

Cuadro No. 3. Delitos contra la Salud tipificados en el Código Penal Federal.

Conductas	Penas
<p>Artículo 194</p> <p>Producción, transportación, tráfico, comercialización, suministro, introducción o extracción de narcóticos.</p> <p>Aportación de recursos económicos o de otra especie para financiamiento, supervisión o fomento.</p> <p>Realizar actos publicitarios o propagandísticos que promuevan el consumo de cualquiera de las sustancias.</p>	<p>10 a 25 años y multa de hasta cien hasta 500 días de multa.</p> <p>Agravante</p> <p>Ser servidor público al que se además se le impondrá la sanción de privación del cargo e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años.</p>
<p>Artículo 195</p> <p>Al que posea alguno de los narcóticos señalados en la LGS y sin la autorización correspondiente a que se refiere, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas descritas en el numeral 194.</p>	<p>5 a 15 años de prisión y de 100 a 350 días de multa.</p>
<p>Artículo 195 bis</p> <p>La posesión de narcóticos, sin la autorización de la LGS cuando no se destine a realizar las conductas de Producción, transportación, tráfico, comercialización, suministro, introducción o extracción de narcóticos.</p> <p>No se procederá penalmente si la persona posee:</p> <ul style="list-style-type: none"> Medicamentos que contengan narcóticos para venta al público que cumpla con los requisitos para su adquisición y sean indispensables para tratamientos ya sea de la persona o de los que estén en su custodia o asistencia. Peyote u hongos alucinógenos que sean utilizados en ceremonias, usos y costumbres de los pueblos indígenas, siempre y cuando sean utilizados dentro del radio de acción y en cantidad que se presuma sólo será para ese uso. 	<p>4 a 7 años con 6 meses de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días de multa.</p>
<p>Artículo 196 ter</p> <p>Al que desvíe o por cualquier medio contribuya a desviar precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas, al cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por la ley.</p>	<p>5 a 15 años de prisión y de 100 a 300 días multa, así como decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito.</p>

Mirada Legislativa

Núm. 94

Conductas	Penas
<p>Artículo 197</p> <p>Al que, sin importar la cantidad y sin mediar prescripción de médico legalmente autorizado, administre a otra persona, sea por inyección, inhalación, ingestión o por cualquier otro medio, algún narcótico.</p>	<p>3 a 9 años de prisión y de 60 a 180 días multa.</p> <p>Agravante</p> <p>Las penas se aumentarán hasta una mitad más si la víctima fuere menor de edad o incapaz comprender la relevancia de la conducta o por resistir al agente.</p>
<p>Artículo 197</p> <p>Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero, mayor de edad, algún narcótico mencionado en la LGS para su uso personal e inmediato.</p> <p>Al que induzca o auxilie a otro para que consuma cualesquiera de los narcóticos señalados en la LGS</p>	<p>2 a 6 años de prisión y de 40 a 120 días multa.</p> <p>Agravante</p> <p>Si quien lo adquiere es menor de edad o incapaz, las penas se aumentarán hasta en una mitad.</p>
<p>Artículo 198</p> <p>Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo: siembre, cultivo o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares ya sea por cuenta propia o con financiamiento de terceros.</p> <p>Al propietario, tenedor o poseedor consienta la siembra, el cultivo, o la cosecha de las plantas citadas.</p>	<p>Cuando en concurren escasa instrucción y extrema necesidad económica se impondrá una pena de 1 a 6 años.</p> <p>Agravante</p> <p>Si no hay concurrencia, la pena será de hasta las dos terceras partes de la sanción consistente en 10 a 25 años y de cien hasta quinientos días multa.</p> <p>En el caso de que se trate de un servidor público la sanción será de 2 a 8 años de prisión y además se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro.</p> <p>Si es un miembro de las fuerzas armadas, retirado, en reserva o en activo además de la pena de prisión será sancionado con baja definitiva e inhabilitación de uno a cinco años.</p>

Conductas	Penas
<p>Artículo 196</p> <p>Servidores Públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos contra la salud o por un miembro de las Fuerzas Armadas ya sea retirado, en reserva o en activo.</p> <p>Si la víctima fuere menor de edad o incapacitada para comprender la relevancia de la conducta.</p> <p>Se utilice menores de edad o incapaces para cometer esos delitos.</p> <p>Se cometa en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión o en sus inmediaciones.</p> <p>Profesionistas, técnicos auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud.</p> <p>Al agente que determine a otra persona cometer algún delito aprovechándose de ser ascendiente familiar o mora o la autoridad o jerarquía.</p> <p>Si se tratará del propietario, poseedor, arrendatario o usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza y lo empleará para realizar delitos.</p>	<p>10 a 25 años y de cien hasta quinientos días multa, aumentadas en una mitad.</p> <p>Agravante</p> <p>También se impondrá suspensión para desempeñar cargo o comisión en el servicio público hasta por cinco años o destitución e inhabilitación.</p> <p>Si se tratará de un miembro de las Fuerzas Armadas, además se le impondrá la baja definitiva e inhabilitación por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.</p> <p>Si fue realizada por personal dedicado a las disciplinas de salud, se le suspenderán sus derechos o funciones para el ejercicio profesional hasta por cinco años e inhabilitación hasta por un tiempo equivalente al de la prisión impuesta.</p> <p>En el caso de establecimientos, se clausurará definitivamente.</p>
<p>Artículo 199</p> <p>El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto conozca que una persona relacionada con algún procedimiento por los delitos previstos en los artículos 195 o 195 bis, es farmacodependiente, deberá informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que corresponda.</p> <p>En todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación al farmacodependiente.</p> <p>Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora.</p>	

Elaboración propia a partir de la información contenida en Normativa Nacional e Internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en <http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=643&TPub=1>

En el Cuadro No. 3 se describen las penas que impone la legislación federal mexicana, pero existen países que imponen incluso la pena de muerte a las personas con conductas que involucren violación a las normatividades en materia de drogas. En *The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2015*¹⁷ se informa que se tienen identificados a 33 Estados

¹⁷ Para mayor información se puede consultar el documento *The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2015* en http://www.ihra.net/files/2015/10/07/DeathPenaltyDrugs_Report_2015.pdf

y territorios que mantienen en su legislación la pena capital por los delitos de drogas. En el 2013, cerca de 549 personas fueron ejecutadas por estar involucradas en drogas y en el 2014 existen estimaciones de que en China han sido al menos 600 ejecuciones.

c. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Independientemente de las penas aplicables para las conductas tipificadas en el CPF, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO), dispone como agravante y aumento de sanciones que los delitos sean cometidos por miembros de la delincuencia organizada, es decir, cuando se trate de tres o más personas constituidas para realizar en forma permanente y reiterada conductas delictivas. Entre esas conductas están las referidas a los delitos contra la salud tipificados en los artículos 194 y 195 del CPF y las penas son las siguientes, de acuerdo con el numeral 4, fracción I de la LFCDO:

- » De 20 a 40 años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días de multa, o al que tenga funciones de administración, dirección o supervisión.
- » De diez a veinte años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días de multa a quien no ejerza las funciones anteriores.

d. Código Federal de Procedimientos Penales

Regula los procedimientos relativos a:

- Averiguación previa que realiza el Ministerio Público;
- La pre instrucción en el que se determinan los hechos y la clasificación conforme a los tipos penales comprendidos en el CPF para demostrar la probable responsabilidad del inculcado o, en su caso la libertad por falta de pruebas;
- La instrucción en las diligencias practicadas ante y por los tribunales; la primera y segunda instancia ante el Ministerio Público o el tribunal de apelación, respectivamente y;
- Los relativos a hechos delictivos a menores o a quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.

En el proceso penal intervienen, además del Ministerio Público, las policías que actuarán bajo la conducción y mando de aquél y los tribunales competentes en atención a la jurisdicción territorial en el que se encuentre el inculpado.

e. Código Nacional Procedimientos Penales

El objetivo de este ordenamiento es precisar las disposiciones que regirán el proceso penal acusatorio y oral, además de que dispone la aplicación de los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, así como también los previstos en la CPEUM, Tratados Internacionales y demás leyes aplicables.

f. Ley Federal de Justicia para Adolescentes

En el artículo 14 de la Ley se establece que no se ejercerá acción penal contra los adolescentes que padezcan de algún trastorno mental que les impidan comprender las consecuencias de la conducta realizada que se configure en algún delito, sin embargo dispone con claridad que la excepción no será aplicable si actuó bajo el efecto de estupefacientes, psicotrópicos o bebidas alcohólicas.

Para este caso, se prevé un procedimiento ante el Juez de Distrito Especializado para Adolescentes, quien podrá determinar la reparación del daño y ordenar que el adolescente o al adulto joven que atienda las siguientes reglas, previa evaluación:

- » Residir en un lugar determinado;
- » Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas;
- » Abstención del consumo de drogas, estupefacientes o bebidas alcohólicas en cualquier lugar público o privado con la finalidad de obstaculizarle el acceso y para contribuir al tratamiento médico y psicológico durante un periodo que no podrá ser inferior a 6 meses ni mayor a 4 años. Esta regla no obliga a someterse a dichos tratamientos previstos en el Programa Individualizado de Ejecución;
- » Participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones;

- » Iniciar o concluir la escolaridad básica, aprender un oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el Juez de Distrito Especializado para Adolescentes;
- » Prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de asistencia social;
- » Permanecer en un trabajo o empleo;
- » Someterse a la vigilancia que determine el Juez de Distrito Especializado para Adolescentes;
- » No conducir vehículos automotores; o
- » Abstenerse de viajar al extranjero.

III. Resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad.

Para entender lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es importante explicar lo que significa el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues bajo ese derecho se concedió el amparo a 4 solicitantes respecto a la expedición y promulgación de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la LGS, así como de su aplicación en el oficio suscrito por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Cabe señalar, que con esa resolución, la Primera Sala de la SCJN declaró inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la LGS, respecto a la **prohibición a la Secretaría de Salud para que autorice la realización de actos relacionados con el consumo personal para fines recreativos como son sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar, única y exclusivamente el estupefaciente “cannabis”**. Y precisa que no se da autorización para realizar actos de comercio, suministro, transferencia, enajenación y/o distribución de la

misma ni tampoco realiza ninguna precisión respecto de la inconstitucionalidad de los delitos que tipifican la conducta del consumo y de otros relacionados con la mariguana.

En un primer punto, se señala que el artículo 1° de la CPEUM, establece que en el territorio mexicano todas las personas gozarán de los derechos humanos previstos en ella y en los tratados internacionales, derechos que no podrán ser restringidos ni suspendidos, además de que prohíbe la discriminación de cualquier persona.

Un documento vinculante para la legislación mexicana es la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948,¹⁸ y respecto a este tema se destacan las definiciones relativas al principio “pro persona” y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en los numerales 1, 2, 22 y 29 se dispone que:

“Artículo 1.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos y con los otros.

Artículo 2.

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Artículo 22.

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

¹⁸ Organización de las Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de Derechos del Hombre*. 26 de noviembre del 2015, de Organización de las Naciones Unidas Sitio web: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/046/82/IMG/NR004682.pdf?OpenElement>

Artículo 29.

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”

De los artículos transcritos, se desprende que los derechos del hombre se refieren a “la persona”, es decir lo importante que es proteger y reconocer que todos los individuos gocen de una protección amplia sin importar su origen, sexo o estrato social, así como también a respetar el derecho a desarrollarse en total libertad, pero siempre dentro de las limitaciones establecidas en ley con el único propósito de respetar los derechos y las libertades de los demás integrantes de una sociedad.

Respecto al derecho al desarrollo de la libre personalidad, la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán,¹⁹ contiene extractos de las sentencias más relevantes compiladas por Jürgen Schwabe,²⁰ en algunas de ellas se desarrolla el concepto de “libre desarrollo de la personalidad”, que implica “no sólo el desarrollo interno del núcleo de la personalidad humana o la esencia del ser humano como una persona de carácter moral y espiritual, sino también en su conducta externa que puede estar restringida por las buenas costumbres, los derechos de otro o por el orden constitucional.

¹⁹ Compilador Jürgen Schwabe. (2009). *Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán*. 25 de noviembre del 2015, de Fundación Konrad Adenauer, A.C. Oficina México Sitio web: http://www.kas.de/wf/doc/kas_16817-544-4-30.pdf

²⁰ Compilador Jürgen Schwabe. (2009). *Sentencia de la Primera Sala de fecha 16 de enero de 1957 –1 BvR 253/56– en el recurso de amparo interpuesto por Wilhelm Elfes de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán*. 25 de noviembre del 2015, de Fundación Konrad Adenauer, A.C. Oficina México Sitio web: http://www.kas.de/wf/doc/kas_16817-544-4-30.pdf

Según ese Tribunal Constitucional “proteger el libre desarrollo de la personalidad– garantiza la libertad general de actuar; en la medida en que ésta no viole los derechos de los otros o no vaya en contra de las buenas costumbres, sólo se encuentra limitada por el orden constitucional.” Y agrega que lo que se busca asegurar en las leyes son “la independencia, la autorresponsabilidad y la dignidad del ser humano dentro de la comunidad estatal.”

De las deliberaciones contenidas en la sentencia, se destaca que “Ante todo, las leyes no deben violar el principio de la dignidad humana, que es el valor más importante de la ley fundamental, como tampoco podrán restringir la libertad espiritual, política y económica de los seres humanos, en modo tal que se vean afectados en su contenido esencial. Esto da lugar a que, por virtud de la Constitución, el ciudadano individual tenga reservada una esfera para la estructuración de su vida privada, y que también exista un último ámbito inviolable de libertad humana, sustraído por completo a toda influencia del poder público. Una ley que intervenga en éste no podrá ser parte del orden constitucional; deberá ser declarada nula por el Tribunal Constitucional Federal.”

De los conceptos vertidos por el Tribunal Alemán se desprende la importancia de que “las leyes expedidas por los órganos legislativos, tengan en consideración el respeto a la libertad humana de actuar en los ámbitos espiritual, política y económica, pero siempre dentro de un marco de respeto a la comunidad, a los derechos de los otros y al orden constitucional.”

En este tema, el Pleno de la SCJN, emitió la tesis aislada²¹ titulada “Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aspectos que comprende”, en ella señala que “entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida” y agrega que “es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser

²¹ Época: Novena Época; Registro: 165822; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Civil, Constitucional; Tesis: P. LXVI/2009; Página: 7. *DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE*. Consultada en <http://200.38.163.178/sjsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdf8f8cfd&Apendice=1000000000000&Expresion=Derecho%2520al%2520libre%2520desarrollo%2520de%2520la%2520personalidad.%2520Aspectos%2520que%2520comprende&Dominio=Rubro&TA=TJ&TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6.1.2.3.4.5.50.7&ID=165822&Hit=1&IDs=165822&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=>

individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles justificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo a sus valores, ideas expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos esos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.”

En esta tesis aislada, el criterio del Pleno de la SCJN se sustenta en que el Estado debe de reconocer la facultad de todos los individuos de elegir de manera libre y autónoma como quiere ser, sin que intervenga la coacción o controles legislativos.

Una vez establecidas las definiciones del Derecho al libre desarrollo de la personalidad, se destaca que además de la tesis antes citada, para la SCJN el derecho al libre desarrollo de la personalidad “es un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, que a su vez está previsto en el artículo 1º constitucional y se encuentra implícito en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por nuestro país.”²²

Además de la relevancia del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la SCJN ha considerado importante la inclusión del concepto de dignidad humana, no más allá de una definición como un derecho fundamental de los individuos, así lo ha manifestado en la tesis aislada “Dignidad Humana. Constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las

²² Novena Época; Registro 165813; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Constitucional; Tesis: P. LXVI/2009; Página: 8. *DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES* Consultada en http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=Dignidad%2520humana.%2520el%2520orden%2520juridico%2520mexicano%2520la%2520reconoce%2520como%2520condici%25C3%25B3n%2520y%2520base%2520de%2520los%2520dem%25C3%25A1s%2520derechos%2520fundamentales&Dominio=Rubro.Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=165813&Hit=1&IDs=165813&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=

personas y no una simple declaración ética”²³

En esa tesis, el órgano constitucional determina que la dignidad humana está reconocida y protegida en la CPEUM en los artículos 1, último párrafo; 2, apartado A, fracción II; 3, fracción II, inciso c) y 25 y abunda que “...no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.”

En este mismo tema, el Pleno de la SCJN, emitió la tesis aislada titulada la “Dignidad Humana. El Orden Jurídico Mexicano la reconoce como condición y base de los demás Derechos Fundamentales.”²⁴ En el texto consigna que “...en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal.”

²³ Décima Época; Registro: 2007731; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCCLIV/2014 (10a.) Página: 602. *DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA*. Consultado en <http://200.38.163.178/sifsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e100000000000&Apendice=10000000000000&Expresion=dignidad%2520humana.%2520constituye%2520una%2520norma%2520jur%25C3%25ADdica%2520que%2520consagra%2520un%2520derecho%2520fundamental%2520a%2520favor%2520de%2520las%2520personas%2520y%2520no%2520una%2520simple%2520declaraci%25C3%25B3n%2520etica&Dominio=Rubro&TA TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2007731&Hit=1&IDs=2007731&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=>

²⁴ Ídem

En este sentido, la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, forman parte de los derechos fundamentales de los individuos, que como se ha señalado están protegidos en la CPEUM, por consecuencia al estar vinculados le son aplicables los principios de principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.

En la tesis aislada “Principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad de los Derechos Humanos. En qué consisten.”²⁵ Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, los define de la siguiente manera:

- » **“Universalidad:** que son inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional en su totalidad; en esta medida, son inviolables, lo que no quiere decir que sean absolutos, sino que son protegidos porque no puede infringirse la dignidad humana,
- » **Interdependencia e Indivisibilidad:** que están relacionados entre sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como elementos aislados. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; esto es, complementarse, potenciarse o reforzarse recíprocamente; y
- » **Progresividad:** constituye el compromiso de los Estados para adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos

²⁵ Época: Décima Época Registro: 2003350 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 Materia(s): Constitucional Tesis: I.4o.A.9 K (10a.) Página: 2254 PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN QUÉ CONSISTEN. Visible en <http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd8f8fcd&Apendice=1000000000000&Expresion=Principios%2520de%2520universalidad%2C%2520interdependencia%2C%2520indivisibilidad%2520y%2520progresividad%2520de%2520los%2520derechos%2520humanos.%2520en%2520que%2520consisten&Dominio=Rubro&TA TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesis-BL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2003350&Hit=1&IDs=2003350&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=>

que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, principio que no puede entenderse en el sentido de que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización íntegra de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual y constantemente hacia su más completa realización.”

En este sentido, también se hace referencia al artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) celebrada del 7 al 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica, el cual establece que “ 1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. Y en su segundo párrafo: 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.”²⁶

Igual importancia tiene el derecho pro persona, el cual tiene un alcance amplio en materia de derechos humanos o en cualquier ámbito, pues su significa que en el análisis para su aplicación, deben de prevalecer la norma jurídica que contemple la protección más extensa o el más restrictivo en el caso de determinar las limitaciones legítimas debe realizarse en favor de cualquier persona que defienda sus derechos consagrados tanto en los tratados internacionales como en la CPEUM.

En este tema, la Primera Sala de la SCJN ha sustentado la tesis aislada: “Principio Pro Personae. El contenido y alcance de los derechos humanos deben realizarse a partir de aquél.”²⁷ En ella determina que la aplicación de ese principio es “ acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas

²⁶ Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

²⁷ Época: Décima Época Registro: 2000263 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. XXVI/2012 (10a.) Página: 659 <http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2000263&Clase=DetalleTesisBL>

con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.”

De lo antes anotado, y a pesar de que en el estudio y aplicación de la resolución de la SCJN se atendió el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como fundamento único para conceder el amparo a los solicitantes, en la misma dejó de atender los demás principios que se aplican en materia de derechos de humanos, como son la dignidad humana, que consta de dos dimensiones: Positiva del desarrollo integral de la personalidad individual (libertad e igualdad) y de Protección frente a la denigración o por desconocimiento.²⁸ En efecto, la dignidad humana contempla el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y el derecho a la protección frente a cualquier tipo de discriminación.²⁹

Otros derechos humanos fundamentales defendidos por los órganos que integran la ONU y que se consideran que la SCJN debió observar en su resolución en relación con previsto en la legislación mexicana son:

El derecho a la vida. *Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.*

La represión contra los usuarios de drogas se traducen en la aplicación de penas severas por su posesión y consumo, es decir son criminalizados y discriminados.

El derecho a la salud. *Constitución de la Organización Mundial de la Salud, artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (y otras fuentes).* Los farmacodependientes tienen derecho a servicios de salud de calidad y disponibles, accesibles, aceptables y suficientes, así como también los enfermos tienen derecho al acceso a medicamentos esenciales como la morfina para controlar el dolor moderado o severo.

²⁸ BIDART Campos, Germán J. *Teoría general de los derechos humanos*, UNAM, México, 1993, pp. 76-77.

²⁹ Pilar J. Monroy Guevara. *Reflexiones en torno a la tutela constitucional de la dignidad humana en el Estado Mexicano: breve referencia con el derecho español*. 2 de diciembre del 2015, de Suprema Corte de Justicia de la Nación Sitio web: https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/38/Becarios_038.pdf

Derecho al debido proceso y a un juicio justo. *Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* Existe un gran número de detenciones relacionadas con las drogas, el sistema judicial penal suele ser lento e ineficaz por el gran número de asuntos y, en ocasiones, las personas sospechosas de cometer un delito permanecen en prisión preventiva durante meses por delitos relacionados al consumo y a la posesión.³⁰

De igual manera, en la ejecutoria, tampoco se contempló que la actuación de los individuos se encuentra acotada por las normas que rigen en una sociedad, es decir omitió ese señalamiento en la ejecutoria, a pesar de que esa consideración está prevista en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), pues aunque es importante del derecho al libre desarrollo de la personalidad en una sociedad todos los derechos individuales deben de estar con comunión con los derechos colectivos.

Otra consideración respecto a la ejecutoria de la SCJN, fue que realizó un análisis somero respecto a las afectaciones en la salud de los consumidores de marihuana, pues indicó que no existen estudios confiables respecto a los efectos en el sistema reproductivo y cardiovascular, alteraciones psicóticas o mentales, del consumidor o afectaciones cognitivas, y textualmente concluye que: “De modo que puede concluirse que los daños a la salud derivados del consumo de marihuana no son graves.”

Además de la anterior conclusión, en la ejecutoria también se señaló que “... existen claras divergencias en la literatura sobre la probabilidad y la frecuencia con la que la farmacodependencia se presenta en los consumidores de marihuana. Adicionalmente, también hay discrepancias en el período y la intensidad de consumo que son necesarios para que la marihuana provoque algún grado de adicción. Al respecto, existen estudios que afirman que existe un *bajo grado de probabilidad* de que la marihuana produzca dependencia.”

³⁰ Para mayor información se puede consultar el documento *The impact of Drug Policy on Human Rights. The Experience in The Americas*, (2015), Centro de Estudios Legales y Sociales, 3 de Diciembre de 2015 Sitio web [http://www.hr-dp.org/files/2015/08/28/Drug+Policy+on+Human+Rights+The+Experience+in+the+Americas.compressed .pdf](http://www.hr-dp.org/files/2015/08/28/Drug+Policy+on+Human+Rights+The+Experience+in+the+Americas.compressed.pdf)

Con las afirmaciones de la SCJN, se demuestran que en el tema del consumo de marihuana, su adicción y consecuencias, falta mucho por conocer e investigar pues también existen estudios que afirman lo contrario como lo manifestado en la página web de National Institute on Drug Abuse The Science of Drug Abuse & Adicction³¹, en el que para describir la marihuana señala que es una “... planta contiene una sustancia química que altera la mente llamada *delta-9-tetrahydrocannabinol* (THC) y otros compuestos relacionados a este. Los extractos con un alto nivel de THC también se pueden derivar de la planta de cannabis.”

En ese mismo artículo se describen las afectaciones al desarrollo cerebral, problemas respiratorios, frecuencia cardiaca elevada, alucinaciones y paranoia temporales, así como también acentuar los problemas de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. Y una mención aparte se refiere a que: “Contrario a lo que se piensa, la marihuana puede ser adictiva. Las investigaciones han demostrado que aproximadamente 1 de cada 11 personas que usan marihuana se vuelven adictas (Anthony, 1994; López-Quintero, 2011). Este riesgo aumenta en aquellos que comienzan durante la adolescencia (a un riesgo del 17 por ciento, o a aproximadamente 1 en 6 personas) (Anthony, 2006) y en los que usan marihuana a diario (a un riesgo entre el 25 y el 50 por ciento (Hall & Pacula, 2003)).”³²

Por todo ello y a pesar de que el otorgamiento del amparo para que los amparistas puedan consumir marihuana para uso lúdico o recreativo así como también para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar; en respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, deja de lado aspectos importantes como la criminalización prevista en el CPF o el derecho a la salud protegido en la CPEUM, la criminalización y el derecho a un juicio justo y expedito, la inexistencia de políticas públicas integrales, las facultades administrativas vigentes de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

³¹ National Institute on Drug Abuse. *La marihuana* Obtenido de <http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drug-facts/la-marihuana> 2 de diciembre del 2015

³² *Ídem*

Cabe señalar que el Ministro José Ramón Cossío Díaz, emitió un voto concurrente a la ejecutoria de amparo³³ y en ella afirma que no es suficiente el otorgar el amparo a los 4 solicitantes, pues de acuerdo a las facultades de la SCJN, previstas en la Ley de Amparo y en la CPEUM, en la sentencia se podría exhortar a las autoridades involucradas en el tema a tomar decisiones que cambiaran la actual política de combate a las drogas, atendiendo tanto la protección a los derechos humanos y con una visión dirigida a la salud pública.

En el voto concurrente se señala que Poder Legislativo tendría que revisar las leyes, reglamentos o cualquier otra norma jurídica que prevean la prohibición en materia de las drogas, como por ejemplo la LGS, el CPF, la LFCDO.

Además de las leyes citadas en ese documento también se considera que se deben de revisar, la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, en el caso de la comercialización se tendrían que modificar la Ley Aduanera, la Ley del Comercio Exterior, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en el caso de las facultades de la Secretaría de Salud, de la Cofepris y del Consejo de Salubridad General, las previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los Reglamentos de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, el de Control Sanitario de Productos y Servicios y el de Insumos para la salud.

Pero de acuerdo con ese documento, también se deben de involucrar las autoridades hacendarias, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y los Gobiernos de las Entidades Federativas, sin embargo se omite mencionar la importancia del Poder Judicial Federal o Estatal, en la impartición de la justicia.

³³ Ministro José Ramón Cossío Díaz. (2015). *Opinión del Ministro José Ramón Cossío Díaz en el Amparo en Revisión 237/2014 (Uso Recreativo de Marihuana)*. 3 de diciembre de 2015, de Suprema Corte de Justicia de la Nación Sitio web: <http://www.sitios.scjn.gob.mx/jrcossio/sites/default/files/articulos/not041115.pdf>

V. Consideraciones finales

El debate de la legalización y no criminalización de la marihuana, no debe solo analizarse desde la perspectiva de una ley, de los derechos humanos, de un análisis médico, de investigaciones sobre el daño fisiológico o mental o desde el punto de vista sociológico ya que deben involucrarse todos esos aspectos para crear legislaciones y políticas públicas con visiones distintas a las tradicionales, distintas a la visión de la Organización de Naciones Unidas y de los Estados Unidos de América.

En efecto, cada país debe decidir sobre su política de las drogas, pues cada región tiene sus particularidades, sus problemáticas, su nivel de desarrollo sociológico, educacional y económico, en un tema tan debatido y complejo como la legalización de la marihuana no debe aplicarse la globalización, pues México es un país que cuenta con una legislación penal que criminaliza el consumo de estupefacientes, un deficiente sistema penal, un sistema judicial plagado de irregularidades y un bajo nivel de investigación médica, social y demográfica respecto a las afectaciones del uso de estupefacientes

Por ello, aun y cuando la ejecutoria dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta un avance, pues se fundamentó en el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, éste es pequeño pues en la resolución no se trató a profundidad todos los aspectos que se involucran el poder consumir marihuana para efectos lúdicos o recreativos pues sólo se constriñó a resolver respecto a que la negativa de la Cofepris para autorizar el consumo como uso lúdico o recreativo de esa droga de acuerdo con lo previsto la Ley General de Salud, ya que violaba el libre derecho del desarrollo de la personalidad y omitió que el consumo lúdico o recreativo de la marihuana requiere de políticas públicas en materia de drogas y estupefacientes, en la que se incluyan la descriminalización y despenalización por el consumo y posesión, así como también ponderar respecto a otros derechos humanos.

Mirada Legislativa

Núm. 94

Mirada Legislativa No.94

" Antecedentes Históricos y Normatividad actual del Cannabis en México"

Elaboración: María Cristina Sánchez Ramírez

Diseño Editorial: Ana Laura Díaz Martínez

Como citar este documento:

Sánchez Ramírez, María Cristina (2017), "Antecedentes Históricos y Normatividad actual del Cannabis en México", *Mirada Legislativa*, No. 94, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, México, 40 p.

Este documento no expresa de ninguna forma la opinión de la Dirección General de Análisis Legislativo, del Instituto Belisario Domínguez ni del Senado de la República.

La serie *Mirada Legislativa* es un trabajo académico cuyo objetivo es apoyar el trabajo parlamentario.

Números anteriores de la serie *Mirada Legislativa* pueden ser consultados en:
<http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx>

ISBN: 978-607-8320-71-4



@IBDSenado



IBDSenado



www.senado.gob.mx/ibd/



[Donceles No. 14, Centro Histórico,](#)
[C.P. 06020, Del. Cuauhtémoc,](#)
[Ciudad de México](#)